Plaza pública

► *Discutible ley bancaria*

► *Actos de mal gusto jurídico*

Miguel Angel Granados Chapa

La banca no fue desnacionalizada por la ley aprobada el último día de actividad legislativa. Pero eso no le quita su carácter de norma discutible, ni gravedad al conjunto de las decisiones que se condensan en ese ordenamiento jurídico. Habría que averiguar, para empezar, si tiene fundamento legal bastante.

Parece que no. El artículo 28, tanto en su texto antes de la reciente reforma como en el que estuvo vigente durante poco más de un mes, a partir de la reforma nacionalizadora, estipula que el servicio de banca y crédito es exclusivo del Estado, y que no se otorgarán concesiones a particulares. La letra de esta última expresión ha quedado a salvo. En verdad no se han acordado nuevas concesiones a personas o instituciones privadas. Pero en cambio se marchó a contrapelo de la exclusividad. Sólo una interpretación muy torzada puede conducir a la creencia de que sigue siendo facultad estatal exclusiva la prestación del servicio de banca y crédito. Los particulares participan en él, y no de modo lateral. Como lo veremos enseguida, su intervención es relevante. Eso quiere decir, entonces, que se les asimilará a la institución estatal, es decir son ya parte del Estado del que tanto abominan, o el Estado ha pasado a ser, parcialmente, patrimonio privado.

Ese era, realmente, el sentido de la reforma al artículo 28 aprobada a fin de año, como parte de lo que se llamó el capítulo económico de la Constitución. La ley bancaria estaba ya, sin duda, ideada o escrita y por eso se consideró que no era un área estratégica en que los particulares no podrían intervenir. El texto original de la iniciativa disponía que en general no quedaría zona de acción estatal donde no pudiera fluir la participación de los particulares. El esfuerzo corrector de los diputados dejó a salvo de esa posibilidad un vasto número de atribuciones, pero no pudo llegar hasta el párrafo que es ahora el quinto de ese artículo, donde en apariencia quedó intacto el precepto anterior sobre la banca. Al quedar fuera del párrafo cuarto, la intermediación financiera quedó a disposición de la manera en que se fijara por ley la participación social, que es el modo elíptico con que se plantea el regreso de los antiguos banqueros.

Hubo una acción de mal gusto jurídico al presentar la iniciativa de ley bancaria cuando se estaba discutiendo apenas el capítulo económico constitucional. En rigor estricto, hubiera debido concluir primero el proceso de reforma constitucional para emitir el proyecto de ley reglamentaria. Porque teóricamente hubiera podido sobrevenir una modificación que al sumar a la banca al conjunto de las áreas sin intervención de particulares, impidiera la concreción de las normas que contiene la ley bancaria.

Haber procedido de manera diversa, como se hizo, puede enseñar un realismo político tan vigoroso como el realismo económico que ha liberado los precios de 2 mil 500 artículos, consistente en saber que a ciencia cierta los diputados y senadores priístas sacarían adelante la reforma constitucional; y que harían lo mismo las legislaturas de los estados. Pero también indica falta de respeto a las normas legislativas, como asimismo es señal de ello el que el proyecto haya llegado a la Cámara 72 horas antes de que el periodo ordinario concluyera. Si las instituciones nacionales de crédito habían trabajado con una personalidad jurídica precaria, discutible o indefinida desde septiembre, ¿no podían haberlo hecho durante dos meses, y en marzo mudar su condición una vez que en el periodo extraordinario se aprobara sin prisas insolentes el ordenamiento respectivo?